

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

Sumilla: En el presente caso, se puede observar que, en un primer procedimiento administrativo, se determinó que las operaciones de la empresa se encontraron subsumidas en el inciso b) del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el cual regula sobre operaciones no reales. Se fiscalizó, se acotó y se determinaron las mismas operaciones como no reales, pero, para efectos del impuesto a la renta, marco normativo que tampoco permite la deducción de gastos que no se hayan realizado u operaciones no reales.

Lima, dieciséis de agosto de dos mil veintidós

**LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DELA REPUBLICA**

VISTA

La causa número veinticuatro mil doscientos cincuenta y nueve guion dos mil diecinueve, Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos González Aguilar (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano, luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso

Vienen a conocimiento de esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos por la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del demandado Tribunal Fiscal, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas seiscientos veinticuatro a seiscientos treinta y cinco), y por la codemandada Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas seiscientos

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

treinta y siete a seiscientos cuarenta y siete); ambos contra la sentencia de vista del quince de julio de dos mil diecinueve (fojas quinientos noventa y nueve a seiscientos dieciocho), que revocó la sentencia de primera instancia, del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas trescientos seis a trescientos cuarenta), que declaró infundada la demanda; y reformándola declaró fundada en parte e improcedente en otro extremo.

Antecedentes del recurso

De la demanda

Mediante el escrito del diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas ciento cinco a ciento cincuenta), la empresa Aleaciones a Base de Cobre S.A.C. interpone demanda contencioso administrativo, postulando las siguientes pretensiones:

a) Pretensión principal: La nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 00342-8-2018 en el extremo que confirmó la Resolución de Intendencia N.º 0260140071125/SUNAT, que declaró infundado el recurso de reclamación contra las Resoluciones de Determinación N.º 024-003-0100936 a N.º 024-003-0100947, y las Resoluciones de Multa N.º 024-002-0134070 a N.º 024-002-0134080, respecto al reparo vinculado a la no deducción de los gastos por operaciones no reales para efectos del impuesto a la renta del ejercicio gravable dos mil seis, la aplicación de la tasa adicional del impuesto a la renta con la tasa de 4.1% por disposición indirecta de rentas no susceptible de posterior control tributario, y la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, vinculada a los reparos que se habrían mantenido.

b) Segunda pretensión principal: Pide que el Juzgado restablezca el derecho de la empresa violado por la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 00342-8-2018, que confirma la Resolución de Intendencia N.º 0260140071125/SUNAT y, en consecuencia, declare fundado el recurso

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

de apelación interpuesto contra la referida resolución de Intendencia en todos sus extremos.

c) Pretensión subordinada a la segunda pretensión principal: Se ordene al Tribunal Fiscal pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la Resolución de Intendencia N.º 0260140071125/SUNAT, teniendo en cuenta la correcta aplicación de las normas y criterios desarrollados en la presente demanda.

d) Tercera pretensión principal: Se ordene a la SUNAT que cumpla con devolver a favor de la empresa cualquier importe que esta le hubiera abonado en ejecución de las resoluciones materia de impugnación, incluidos los intereses que pudieran haberse devengado, y/o devolver a la demandante cualquier carta fianza u otra garantía, así como cualquier monto que esta le hubiera retenido a título de embargo en forma de retención y/o otra modalidad como devoluciones por saldos a favor o créditos que pudiera haber compensado indebidamente contra la deuda impugnada materia de la demanda.

Como fundamentos de su demanda, señala que la administración tributaria consideró que la adquisición de la materia prima calificaba como operaciones no reales, con lo que desconoció el costo de venta de estas. Asimismo, la demandante señala que sí cumplió con acreditar la adquisición de la materia prima con la presentación de diversos medios probatorios que acreditaban la necesidad fáctica de contar con la materia prima observada para continuar con el proceso de producción de la compañía del ejercicio dos mil seis. También, refiere que la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 15501-1-2014, emitida respecto al impuesto general a las ventas del ejercicio dos mil seis, reconoce que las adquisiciones de materia prima son reales, pues se encuentran bajo los alcances del inciso b) del artículo 44 de la Ley de Impuesto General a las Ventas, supuesto en el cual la operación sí es real, pero se desconoce el derecho de la compañía a usar el impuesto general a las ventas.

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

De la sentencia de primera Instancia

El Juez del Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda en todos sus extremos.

Señala los siguientes fundamentos:

- a) Los comprobantes de pago supuestamente emitidos corresponden a operaciones no reales, debido a que no se encuentran sustentadas adecuadamente, ya que no se ha presentado documentación suficiente para sustentar la realidad de las operaciones contenidas en los comprobantes de pago cuestionados.
- b) El inciso b) del artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas hace referencia a operaciones no reales; por lo tanto, no corresponde amparar el argumento expuesto por la demandante al considerar que se trata de operaciones reales.
- c) Los comprobantes de pago fueron emitidos por la supuesta adquisición de cobre. Dichas adquisiciones sí serían necesarias para producir la renta, ya que el objetivo social de la empresa es fabricar barras y tubos, pero para la deducción se debe contar con un mínimo de elementos de prueba que permitan establecer que los comprobantes de pago respaldan determinadas adquisiciones de materia prima, según lo dispone el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

De la sentencia de segunda instancia

El colegiado de la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista contenida en la resolución número quince, del quince julio de dos mil diecinueve (fojas quinientos noventa y nueve a seiscientos dieciocho), resolvió:

REVOCAR la Sentencia expedida mediante Resolución N° 12, de fecha 27 de marzo de 2019, que obra en el expediente electrónico, que declara infundada la demanda expedida; y **REFORMÁNDOLA** se declara **FUNDADA EN PARTE** la demanda; en consecuencia **NULA** la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00342-8-2018; cumpla la Administración Tributaria con realizar la devolución dispuesta de acuerdo a los términos

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

*señalados en el fundamento décimo primero de la presente resolución; carece de objeto declarar fundada la apelación interpuesta contra la Resolución de Intendencia N° 0260140071125/SUNAT; e **IMPROCEDENTE** la demanda en cuanto a la pretensión subordinada.*

Los fundamentos son los siguientes:

- a) Las operaciones que fueron materia del reparo por parte de la administración tributaria en este proceso, también fueron materia de observación en anterior procedimiento de fiscalización que examinó el crédito fiscal del impuesto general a las ventas por el mismo periodo de enero a diciembre de dos mil seis. Existe sentencia firme que confirma la Resolución del Tribunal Fiscal N.º15501-1-2003, en el extremo que convalida el reparo efectuado por la administración tributaria al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas del periodo de enero a diciembre de dos mil seis, en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 44 de la Ley del IGV.
- b) Al considerar como operaciones no reales en tanto no se habría acreditado que los emisores de los comprobantes de pago participaron en las operaciones de compraventa de insumos como los reales proveedores, la administración tributaria no cuestiona la existencia de insumos que habrían sido utilizados en el proceso productivo de la empresa.
- c) La legislación del impuesto a la renta no ha previsto que se pueda deducir el gasto que corresponda a operaciones no reales cuando se acredite la utilización de medios de pago; menos aún, se ha previsto requisitos para dichos medios de pago. En tal sentido, lo expuesto solo tiene efectos para el reparo al crédito fiscal.
- d) Para efectos de determinar la renta bruta, corresponderá aplicar lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta. Así, corresponderá deducir del ingreso neto el costo computable de los bienes enajenados, entendiendo como costo computable, entre otros, el costo de adquisición, producción o valor de ingreso al patrimonio, lo que comprendería los insumos (materia prima) utilizados para la elaboración

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

de los bienes que serán materia de posterior enajenación, lo cual presupone la existencia de las operaciones de compra o adquisición de tales insumos.

Del recurso de casación y del auto de calificación

Los recursos de casación interpuestos han sido declarados procedentes por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, mediante autos calificatorios del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por las siguientes causales¹:

Causales declaradas procedentes del recurso de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del demandado Tribunal Fiscal

a) Inaplicación del artículo 139 numeral 5 de la Constitución. Sostiene que se verifica que la Sala no ha tomado en cuenta lo resuelto en la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N.º 00342-8-2014, en el que el Tribunal Fiscal ha sustentado adecuadamente su pronunciamiento actuando todos los medios probatorios que ha tenido a la vista, llegando a la válida conclusión que las operaciones realizadas por la demandante no resultan fehacientes, debido a que los citados medios probatorios presentados por la demandante no acreditaron de forma suficiente la realidad del servicio brindado. Así pues, no existe error de hecho y derecho en relación al objeto materia de reparo, que consta en la verificación de la fehaciencia del gasto y no del costo de ventas, tal y como ya se había pronunciado el Tribunal Fiscal en la RTF N.º 15501-1-2014, en el que se analizó el reparo del Impuesto General a las Ventas (IGV) por crédito fiscal de los periodos tributarios de enero a diciembre de dos mil dieciséis en relación a las mismas operaciones reparadas por haber quedado acreditado el supuesto regulado por inciso b) del artículo 44 de la Ley del IGV. Cabe precisar que, el hecho de que los emisores de los comprobantes de pago no sean los que participen de las operaciones, se constituye también como una operación no real para efecto del Impuesto a la Renta, por cuanto dicho cuerpo normativo no permite la deducción de gastos que no se hayan realizado. Así tenemos que, de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de establecer la renta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente. Es evidente que, para la deducción de gastos, se presupone la existencia real de las operaciones que conllevan al desembolso de dinero, es decir, que efectivamente se haya realizado la venta de bienes por parte del proveedor y, por ende, la compra por parte del adquiriente, verificándose el hecho económico y generándose así el gasto para efecto del impuesto a la renta, según sea el caso. Así pues, la ausencia de una operación real que justifique la emisión de un comprobante de pago determinará la inexistencia del gasto, consecuencia que resulta obvia por cuanto lo contrario implicaría que un sujeto pudiera beneficiarse con las deducciones de un gasto que nunca realizó, lo que evidentemente no ha tenido en cuenta la Sala al momento de resolver. Dicho esto, se concluye que una operación es no real si se llega a establecer que alguna de las partes (vendedor o comprador) o el objeto de la transacción no existen o son distintos a los que aparecen consignados en el

¹ Se transcriben las reseñas elaboradas en su oportunidad por la mencionada Sala.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

comprobante de pago, lo que no ha tenido en cuenta la Sala al momento de resolver, por lo que incurre en una indebida motivación.

b) Inaplicación del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. *Indica que el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, dispone que a fin de establecer la renta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto no esté expresamente prohibida por esta ley. Cabe precisar que, para tener derecho a la deducción de gastos, no resulta suficiente que el contribuyente cuente con comprobantes de pagos que puedan respaldar las operaciones realizadas, ni con el registro contable de las mismas, sino que debe demostrar que dichos comprobantes en efecto correspondan a una operación que se haya producido en la realidad para sustentar la deducción de gastos en forma fehaciente y razonable. Es evidente que lo que busca el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta es que, para la deducción de gastos, se presupone la existencia real de las operaciones que conllevan al desembolso de dinero, es decir, que efectivamente se hayan realizado, la venta de bienes por parte del proveedor y, por ende, la compra por parte del adquiriente, verificándose el hecho económico en la realidad. Siendo ello así, queda claro que la ausencia de una operación real que justifique la emisión de un comprobante de pago determinará la inexistencia del gasto, consecuencia que resulta obvia por cuanto lo contrario implicaría que un sujeto pudiera beneficiarse con las deducciones de un gasto que nunca efectuó. Así tenemos que el contribuyente que recibe un comprobante de pago que no corresponda a una operación real no tendrá derecho a deducir el gasto originado por la adquisición de los bienes o prestaciones de servicios.*

Causal declarada procedente del recurso de la SUNAT

a) Infracción del artículo 139 numeral 3 de la Constitución. Vulneración del principio de prohibición de la arbitrariedad y del derecho a la motivación adecuada. *Sostiene que la Sala Superior en la sentencia recurrida ha incurrido en motivación aparente, al sustentar la sala su fallo en base a un acto no realizado por el Tribunal Fiscal, pues siempre se mantuvo el reparo en vía administrativa, y al haber resuelto en contra de lo regulado en la norma que sustenta el reparo (considerando noveno y décimo de la sentencia de vista). Precisa que según la sala la controversia no versa sobre la determinación del impuesto a la renta, sino sobre el costo computable para la determinación de la renta bruta, señalando posteriormente que no correspondía desconocer el costo computable para la renta bruta basado en operaciones no fehaciente, que la propia sala señala haber confirmado en el expediente judicial N.º 3883-2015, sino que precisa que la Ley del Impuesto a la Renta no contempló un requisito similar al del crédito fiscal de contar con un comprobante de pago para reconocer el costo computable de los bienes enajenados devenidos que tienen origen en una operación no real. El razonamiento antes citado ha llevado a la sala superior a concluir que la demanda de la empresa debe ser amparada y por tanto reconocerse el costo de adquisición de los bienes adquiridos en una operación no real. Sin embargo, cabe señalar que la administración desde que efectuó el reparo, siempre consignó que este se ha efectuado por gasto no deducible por operaciones no reales, así también se señaló en todo momento que la base legal del reparo tiene sustento en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta vigente en el ejercicio dos mil seis, el cual fue revisado por la Administración y el Tribunal Fiscal; sin embargo, en instancia judicial el juez superior ha señalado erradamente que se ha cambiado el reparo acotado por la administración cuando ello no ha sucedido. Además, especifica que la sentencia recurrida ha señalado sin motivación alguna que al haberse dejado sin efecto el reparo por gastos no deducible por operaciones no reales, correspondía dejar sin efecto también el reparo de tasa adicional del cuatro punto uno por ciento (4.1%) por disposición indirecta de la renta.*

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

CONSIDERANDO

Primero: Delimitación del pronunciamiento casatorio

1.1. El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los fines esenciales para los cuales ha sido previsto, es decir, la adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil; siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el desarrollo de la nación.

1.2. En esta misma línea, la profesora Marianella Ledesma² señala:

El recurso de casación es un recurso que vela por la adecuada aplicación del derecho objetivo. No se orienta a enmendar el agravio de la sentencia, sino que busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Este recurso nace para el control de las infracciones que las sentencias y autos puedan cometer en la aplicación del derecho objetivo. En ese sentido, la Corte de Casación toma el hecho narrado por el juez o tenido por probado, para reexaminar si la calificación jurídica es apropiada a aquel hecho así descrito. Si bien la casación se orienta a corregir el error de derecho, debemos señalar que dicho error debe ser esencial o decisivo sobre el fallo, es lo que la doctrina ha llamado la “eficacia causal del error”, el que es necesario para ser revisado en casación, que dichos errores hayan influido en la decisión.

Segundo: Controversia

2.1. Previo al desarrollo de las causales que fueron declaradas procedentes, es oportuno anotar que la misma se generó como consecuencia del conflicto consistente en determinar si el reparo vinculado a la no deducción de los gastos por operaciones no reales para efectos del impuesto a la renta del ejercicio gravable dos mil seis y el reparo por la aplicación de la tasa adicional del impuesto a la renta con la tasa de 4.1 % por disposición indirecta de rentas no susceptible de posterior control tributario, así como la comisión de la

² LEDESMA NARVÁEZ, Marianella (2011). *Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo*. Lima, Gaceta Jurídica; p. 830.

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, vinculada a los reparos antes mencionados, son acordes a ley.

Tercero: Causales procesales y materiales

3.1. Se han declarado procedentes los recursos de casación por causales de orden procesal y material. La infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de los principios procesales. Esto hace pertinente que, en principio, se analice la causal de orden procesal y luego, de ser el caso, las causales de orden material, dado el eventual efecto nulificante de aquella.

3.2. Precisemos lo siguiente:

[...]al término “infracción” —en sentido general— lo podemos asimilar a lo que la doctrina procesal conoce como el error, dentro de él por cierto encontramos al error in iudicando, el error in procedendo y el error in cogitando. Entonces, cuando se denuncia la existencia de una infracción lo que realmente se hace es evidenciar la existencia de un error en la decisión judicial, la cual —como ya dijimos— puede ser de naturaleza sustantiva o procesal [...].³

En consecuencia, nos corresponde determinar si existió infracción en la decisión judicial respecto a las normas que los recurrentes denuncian, que, conforme se puede observar de los fundamentos que la sustentan, son normas que rigen los pagos de impuesto a la renta.

Cuarto: Pronunciamiento respecto a las causales procesales

4.1. La Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del demandado Tribunal Fiscal, y la SUNAT denunciaron las siguientes causales: **la inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución y la infracción del numeral 3 del**

³ CAVANI, Renzo (2006). *Código Procesal Civil comentado por los mejores especialistas*. Tomo III. Lima, Gaceta Jurídica, p. 342

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

artículo 139 de la Constitución: vulneración del principio de prohibición de la arbitrariedad y del derecho a la motivación adecuada. Estas causales, por su naturaleza procesal, están relacionadas, ya que la primera causal está dirigida a sustentar que Sala Superior incurrió en indebida motivación al no tener en cuenta que la operación es no real o el objeto de la transacción no existe o son distintos a los que aparecen en el comprobante de pago. Asimismo, la segunda causal se refiere a que la Sala Superior se sustentó en un acto no realizado por el Tribunal Fiscal: basar la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 00342-8-2014 en la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 15501-1-2014 (emitida anteriormente), con lo que el colegiado superior habría incurrido en **motivación aparente**.

4.2. Respecto a las causales antes descritas, se debe precisar que el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política consagra como principio rector de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, el cual, conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las personas involucradas en él, las condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración.

4.3. Uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, consagrado por el numeral 5 del artículo 139 de la Carta Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y del derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia.

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

4.4. Así, este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial directamente vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las razones que llevaron al juez a decidir una controversia en un determinado sentido; implica, por ello, un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia específica en los distintos tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas normas de carácter legal, como el numeral 6 del artículo 50, los artículos 121 y 122 del Código Procesal Civil, por los que se exige que la decisión del juzgador cuente con una exposición ordenada y precisa de los hechos y el derecho que justifiquen la decisión.

4.5. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia N.º 3943-2006-PA/TC, del once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación; sino que basta que las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, suficiente y congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento, para considerar que la decisión se encuentra adecuadamente motivada.

4.6. Con los alcances legales y jurisprudenciales efectuados, corresponde analizar si la Sala Superior cumplió o no con expresar las razones de hecho y de derecho por las cuales resolvió revocar la sentencia apelada —que declaró

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

infundada la demanda— y, reformándola, declaró fundada en parte la demanda e improcedente en cuanto a la pretensión subordinada, lo cual implica dar respuesta a los argumentos que exponen las partes recurrentes como omisión por parte de la Sala Superior.

4.7 Para tal efecto, tenemos que la Sala Superior, sobre la legalidad de la resolución impugnada, señaló lo siguiente:

SÉPTIMO: De los actuados en el expediente administrativo electrónico y de la demanda judicial, se advierte que la empresa tiene como actividad principal la fabricación de barras, perfiles, tuberías y lingotes de aleación de latón y cobre, siendo que el proceso de fabricación empieza con la selección y compra de materia prima, tal como lingotes de cobre, zinc, latón, y plomo de calidad SHG, así como chatarra de latón y chatarra de cobre, estos últimos abastecidos por “chattarreros” o pequeños comerciantes que son generalmente personas naturales que se dedican a ofrecer dichos insumos. Tal como hemos expresado en anteriores considerandos, es objeto de reparo las adquisiciones efectuadas por la empresa a los proveedores que se detallan en el Anexo N° 02 del Requerimiento N° 02221100072784 (Ramírez Yoplac María Elena, Ramírez Yoplac Carmen Gissela, Gómez de Bargarán Carmen, Yoplac Escalante Julia Gisela, Barrera Olarte Raúl César, Chacón Gamonal Elena Maribel, Castillo Corales Nancy Aydee, Antúñez Chauca Damián Isidro, Ferrer Corl Berardo y Goicochea Cabrera José Vladimir) [...]se advierte que -de los cruces de información y del testimonio propio de los comparecientes citados durante el procedimiento de fiscalización- la Administración Tributaria fundamenta el reparo de la compra de materia prima al considerarlas como operaciones no reales en tanto no se habría acreditado que los emisores de los comprobantes de pago hayan participado en la operación de compra venta de insumos como los reales proveedores, siendo que la Administración Tributaria no ha cuestionado la existencia de los insumos que habrían sido utilizados en el proceso productivo de la empresa. OCTAVO: En ese contexto, como se ha mencionado anteriormente, respecto las mismas operaciones de compra a los mismos proveedores antes señalados y durante el mismo periodo tributario 2006, la Administración Tributaria reparó el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas consignado en los comprobantes de pago que fueron presentados por la empresa a efectos de sustentar las adquisiciones de los insumos (materia prima), fundamentando el reparo en lo dispuesto en el inciso b) del artículo 44° de la Ley del Impuesto General a las Ventas [...]Al respecto, cabe anotar que el proceso contencioso administrativo iniciado por la empresa demandante a efectos de que se declaren nulas las resoluciones administrativas que confirmaron el reparo efectuado por la Administración Tributaria al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas por el mismo periodo de enero a diciembre de 2006, cuenta con sentencia firme confirmando lo resuelto en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 15501-1-2014 en el extremo referido al reparo del crédito fiscal en virtud de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 44° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, que establece que califica como una operación no real cuando el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación. Siendo ello así, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 00342-8-2018, cuya nulidad es solicitada en este proceso, señaló que dado que tales operaciones de compra con los proveedores indicados ya habían sido materia de análisis por dicho colegiado, procedía que se remitiese a lo señalado en la Resolución N°; toda vez que dicho pronunciamiento v incula el análisis del reparo materia de controversia en este proceso. Sin embargo, se advierte que pese a que el 15501-1-2014 reparo que efectúa la Administración Tributaria es al costo de ventas al considerar

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

que tales adquisiciones calificaban como operaciones no reales o no fehacientes, tal como lo ratifica en la Resolución de Intendencia N° 0260140071125/SUNAT que fue objeto de impugnación en sede administrativa, sin mayor justificación el Tribunal Fiscal resuelve partiendo del análisis de las normas vinculadas al gasto [...]NOVENO: De acuerdo a lo antes expuesto, es claro que el Tribunal Fiscal incurre en un error de hecho y derecho al considerar que fue objeto de reparo la deducción del gasto pues lo que fue materia de reparo fue el costo de ventas (materia prima). Dicha diferencia resulta relevante no solo por cuanto ambos tipos de erogaciones (costo/gasto) en que puede incurrir la empresa ostentan naturaleza distinta, sino que además el propio legislador ha regulado un tratamiento diferenciado a dichos conceptos. Así, la Ley del Impuesto a la Renta regula principalmente en su artículo 20° las reglas vinculadas al reconocimiento del costo computable –el cual comprende los insumos y/o materia prima- en el caso de enajenación de bienes señalando que “la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados”, mientras que el artículo 37° regula principalmente las reglas vinculadas a la deducción del gasto para efectos de establecer la renta neta. En el presente caso, para efectos de determinar la renta bruta corresponderá aplicar lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley del Impuesto a la Renta correspondiendo deducir del ingreso neto el costo computable de los bienes enajenados, entendiendo como costo computable, entre otros, el costo de adquisición, producción o valor de ingreso al patrimonio, lo que comprendería los insumos (materia prima) utilizados para la elaboración de los bienes que serán materia de posterior enajenación, lo cual presupone la existencia o fehaciencia de las operaciones de compra o adquisición de tales insumos. En concordancia con lo antes subrayado, en el caso de autos, como se ha visto, la Administración Tributaria no ha cuestionado la fehaciencia respecto la adquisición de la materia prima utilizada por la empresa o sobre la existencia de la referida materia prima, sino que los emisores de los comprobantes de pago (que fueron presentados como sustento de la adquisición de la materia prima) no habían participado en las operaciones de compra-venta de los insumos como los reales proveedores, hecho que ya ha sido materia de análisis en anterior proceso recaído en el Expediente N° 03883-2015 y que cuenta con Sentencia firme [...] Del extracto citado de la Sentencia recaída en el Expediente N° 03883-2015, se observa que el reparo efectuado por la Administración Tributaria tiene sustento legal en el inciso b) del artículo 44° del Impuesto General a las Ventas, que considera como una operación no real aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito, no ha realizado verdaderamente la operación, por lo que correspondía que el receptor de dicho comprobante de pago no tenga derecho al crédito fiscal, más aún si se tiene en cuenta que la Ley del IGV en su artículo 18° establece como requisito sustancial del crédito fiscal que el Impuesto General a las Ventas esté consignado en el comprobante de pago, con lo cual se requiere como sustento el comprobante de pago. DÉCIMO: En tal escenario, se tiene que para efectos del Impuesto a la Renta la Ley aplicable, por razones de temporalidad, no contempló un requisito similar (como ocurre en el caso del crédito fiscal) de contar con un comprobante de pago para reconocer el costo computable de los bienes enajenados a efectos de determinar la renta bruta. Por otro lado, tampoco existe una determinación legal de las situaciones que deben comprenderse dentro de lo que debe considerarse como una “operación no real”, siendo que en el presente caso –como ya se ha demostrado- no ha sido materia de controversia la acreditación de la existencia de la operación de compraventa de los insumos utilizados como materia prima, sino que los emisores de los comprobantes de pago no fueron los verdaderamente participación en tales operaciones, no pudiéndose aplicar el artículo 44° de la Ley del IGV para establecer la definición de operación no fehaciente para efectos del Impuesto a la Renta, ya ello vulneraría el principio de legalidad y reserva de ley. [...]

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

4.8 De lo argumentado por la Sala Superior, se advierte que ha referido los argumentos por los cuales consideró que la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 00342-8-2018 incurre en error de hecho y derecho, pues el colegiado administrativo consideró en su análisis a la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 15501-1-2014, en la cual fue materia de reparo el costo de ventas (materia prima) y, en este caso en concreto, fue objeto de reparo la deducción del gasto. La Sala Superior menciona que la diferencia resulta relevante no solo por cuanto ambos tipos de erogaciones (costo/gasto) en que puede incurrir la empresa ostentan naturaleza distinta, sino que además el propio legislador ha regulado un tratamiento diferenciado para dichos conceptos. Asimismo, justifica por qué no correspondió hacer un reparo respecto al costo de ventas, pues estima que el procedimiento debió hacerse respecto al reparo por deducción de gastos, ya que, para efectos de determinar la renta bruta, correspondía deducir del ingreso neto al costo computable conforme al artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta.

4.9 Se concluye —aunque esto no signifique estar de acuerdo necesariamente con el sentido de la decisión— que la Sala Superior ha cumplido con pronunciarse lógica, razonada y congruentemente sobre los fundamentos de hecho y derecho por los que procedería la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 00342-8-2018, ya que el cuestionamiento que realizó la administración tributaria ya había sido materia de análisis en un anterior proceso recaído en la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 15501-1-2014, donde se mencionó que el reparo efectuado por la administración tributaria tiene sustento legal en el inciso b) del artículo 44 del IGV (crédito fiscal). Sin embargo, el caso en concreto, según razona el colegiado superior, trata sobre deducción de gastos, y las normas de la Ley del Impuesto a la Renta no establecen como requisito el comprobante de pago como sustento del costo. Por ende, corresponde declarar infundados en este extremo los recursos de casación presentados por el Tribunal Fiscal y la SUNAT.

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

Quinto: Pronunciamiento respecto de la causal material por inaplicación del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta

5.1 Sobre esta causal denunciada, el Tribunal Fiscal sostiene que la Sala Superior no aplicó al caso de autos el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que regula los gastos necesarios para producir y mantener su fuente. Al respecto, podemos observar que la Sala Superior mencionó lo siguiente:

[...]

Así, la Ley del Impuesto a la Renta regula principalmente en su artículo 20° las reglas vinculadas al reconocimiento del costo computable –el cual comprende los insumos y/o materia prima- en el caso de enajenación de bienes señalando que “la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados”, mientras que el artículo 37° regula principalmente las reglas vinculadas a la deducción del gasto para efectos de establecer la renta neta. En el presente caso, para efectos de determinar la renta bruta corresponderá aplicar lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley del Impuesto a la Renta correspondiendo deducir del ingreso neto el costo computable de los bienes enajenados, entendiendo como costo computable, entre otros, el costo de adquisición, producción o valor de ingreso al patrimonio, lo que comprendería los insumos (materia prima) utilizados para la elaboración de los bienes que serán materia de posterior enajenación, lo cual presupone la existencia o fehaciencia de las operaciones de compra o adquisición de tales insumos. En concordancia con lo antes subrayado, en el caso de autos, como se ha visto, la Administración Tributaria no ha cuestionado la fehaciencia respecto la adquisición de la materia prima utilizada por la empresa o sobre la existencia de la referida materia prima, sino que los emisores de los comprobantes de pago (que fueron presentados como sustento de la adquisición de la materia prima) no habían participado en las operaciones de compra-venta de los insumos como los reales proveedores, hecho que ya ha sido materia de análisis en anterior proceso recaído en el Expediente N° 03883-2015 y que cuenta con Sentencia firme [...] se observa que el reparo efectuado por la Administración Tributaria tiene sustento legal en el inciso b) del artículo 44° del Impuesto General a las Ventas, que considera como una operación no real aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito, no ha realizado verdaderamente la operación, por lo que correspondía que el receptor de dicho comprobante de pago no tenga derecho al crédito fiscal [...].

5.2. La Sala Superior concluye que la administración tributaria cuestionó la compra de la materia prima al considerarla como operación no real, en tanto no se había acreditado que los emisores de los comprobantes de pago hayan participado en la operación de compraventa de insumos como los reales proveedores (como en el anterior procedimiento administrativo signado en el Expediente N.º 3883-2015, que tiene sentencia firme), cuando lo que correspondía cuestionar era la fehaciencia respecto a la adquisición de la

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

materia prima utilizada por la empresa. Por ende, para el colegiado superior corresponde aplicar el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, que regula la determinación la renta bruta.

5.3. Al respecto, la administración tributaria observó las operaciones de compraventa, los comprobantes de pago, las personas que emiten los comprobantes de pago y demás documentos, con la finalidad de verificar que dichas operaciones sean fehacientes, para determinar si le correspondía o no la deducción del impuesto a la renta. Por tanto, debemos advertir que la administración tributaria no solo observó a los emisores de los comprobantes de pago, sino también los demás documentos de las operaciones de compraventa, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

En ese sentido, corresponde tener en cuenta el texto de la norma señalada:

*Artículo 37°.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría **se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente**, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, **en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley.** [...] [Énfasis nuestro]*

5.4. Debemos advertir que el impuesto se aplica sobre la renta neta; es decir, la renta bruta menos los gastos necesarios para producirla o mantener su fuente, en tanto la deducción no se encuentre expresamente prohibida conforme lo establece el artículo en referencia. Así, se recoge el denominado principio de causalidad, el cual establece que la empresa que deduzca un gasto para efecto del impuesto a la renta debe estar en condiciones de **demostrar que estos gastos son necesarios** y que están destinados a **contribuir con la generación de rentas gravadas** de dicha empresa.

5.5. Por ello, para evaluar la causalidad de los gastos en que se incurra y que estos generen renta gravada, **es necesaria la acreditación mediante documentos**⁴. **Es decir, debe existir un factor previo cuya evaluación es**

⁴ Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

necesaria para establecer la deducibilidad del gasto, el cual es demostrar que la operación es fehaciente y real, tal como explica el Dr. Luis Duran Rojo⁵:

Aunque en las normas del IR no haya mención expresa sobre la veracidad o realidad de las operaciones que están vinculadas con el gasto, de suyo se entiende que debemos estar ante un gasto preexistente y sobre el cual hay —por lo menos— indicios razonables de su fehaciencia; dicho de otra manera, para la determinación del IR, se está considerando a un gasto respecto del cual puede tenerse razonable confianza de su ocurrencia y su utilización.

5.6. De este razonamiento, debemos entender que para efectos de la deducción del impuesto a la renta, es necesario acreditar que el gasto se ha producido, es decir, se debe contar con la documentación para demostrar que la operación es real, y solo luego, teniendo como presupuesto dicha fehaciencia, se debe establecer si el gasto fue causal, es decir, si el gasto realizado se encontró vinculado con la generación de renta gravada.

Por lo tanto, en el presente caso, es necesaria la aplicación del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, ya que debe ser obligatorio verificar primero si efectivamente la empresa Aleaciones a base de Cobre S.A.C realizó una operación fehaciente, es decir, real, ya que no solo basta con la acreditación de los comprobantes de pago, sino que son necesarios otros documentos, como lo menciona el Tribunal Fiscal al emitir la Resolución N.º 00342-8-2018:

[...]

Impuesto a la Renta ejercicio 2006

Gastos no deducibles por sustentarse en operaciones no reales

*Que del Anexo N°2 de la Resolución de Determinación N° 024-003-0100936 (foja 4417), emitida por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2006, se tiene que se reparó la base imponible de dicho impuesto por concepto de gastos deducibles por sustentarse en operaciones no reales, por el importe de S/ 9 486 935,00, conforme con los Anexos N°1 y 2 del Resultado del Requerimiento N° 0222110007278. Que conforme con el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta, los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Que es criterio de este Tribunal que para tener derecho al crédito fiscal o a la deducción de gastos, **no basta acreditar que se cuenta con los comprobantes de pago que***

Artículo 44 .- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría:

[...]

j) Los gastos cuya documentación sustentaría no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobante de Pago.

⁵ DURÁN ROJO, Luis. "Alcances del principio de causalidad en el impuesto a la renta empresarial". En *Revista Contabilidad y Negocios*, N.º 7, 2009; pp. 5-16.

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

respalden las operaciones efectuadas ni con su registro contable, sino que fundamentalmente es necesario demostrar que dichos comprobantes en efecto corresponden a operaciones reales o existentes, es decir, que se produjeron en la realidad [...] [Énfasis nuestro]

5.7. Por ende, la administración tributaria verificó si la operación era fehaciente, realizando la actuación de todos los medios probatorios, así como los cruces de información, y llegó a la conclusión de que las operaciones observadas no correspondían a operaciones reales. En consecuencia, reparó la base imponible del impuesto a la renta del ejercicio dos mil seis y emitió la Resolución de Determinación N.º 024-003-0100936.

5.8. Entonces, podemos advertir que para acreditar la fehaciencia de las operaciones, la empresa no debió incurrir en gastos no aceptables, definidos en estos términos por Humberto Medrano⁶:

Gastos no aceptables. *En principio, son deducibles todos los gastos necesarios para producir y mantener su fuente; pero la ley prohíbe, específicamente, descontar de la utilidad algunos de ellos. Entre las restricciones más importantes, pueden considerarse: [...] Gastos y documentación sustentatoria: el reglamento de comprobante de pago señala las características que deben tener estos instrumentos [...] si el comprobante no cumple tales requisitos o el emisor tiene la condición de no habido, el gasto no se encuentra sustentado adecuadamente y por lo tanto no resulta aceptable. Adicionalmente, de acuerdo con una ley específica, las obligaciones que cumplen mediante sumas de dinero deben satisfacerse utilizando medios de pago, entre los cuales se encuentra [...] cheque con cláusula no negociable.*

Por ende, para poder sustentar los gastos realizados en los comprobantes de pago, estos debían cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, lo que implica, entre otros, que el emisor de dicho comprobante de pago no tenga la condición de no habido. Los gastos que no cumplan con dichos requisitos, no podían considerarse como reales y, en consecuencia, no serían pasibles de deducción del impuesto a la renta.

5.9. En ese contexto, estando a que el contribuyente no logró demostrar con elementos de prueba la existencia de dichas adquisiciones a consecuencia de la operación que figura en los comprobantes de pago, elemento esencial para

⁶ MEDRANO CORNEJO, Humberto (2018). *Derecho tributario. Impuesto a la renta. Aspectos significativos*. Lima, PUCP; pp. 108-109

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

la deducción del impuesto a la renta, se concluye que el procedimiento administrativo llevado en el caso en concreto es conforme a ley.

Sexto: Sobre la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 15501-1-2014

6.1. Además, es necesario precisar que la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 15501-1-2014, efectivamente, cuenta con sentencia firme que declaró infundada la demanda presentada por Aleaciones a base de Cobre S.A.C., emitida en el Expediente judicial N.º 3883-2015. Dicha sentencia confirmó el reparo efectuado por la administración tributaria y tiene sustento legal en el inciso b) del artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, que considera como una operación no real aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, por lo que, en aquel caso, correspondía que el receptor de dicho comprobante de pago no tenga derecho al crédito fiscal, salvo que haya cancelado la operación, aunque ello no convierta la operación en real.

6.2. Conforme podemos observar, existe sentencia firme respecto a los documentos (comprobantes de pago) que presenta el contribuyente en el anterior procedimiento administrativo. Se advierte claramente que el hecho se encuentra subsumido en el artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, **el cual regula los comprobantes de pago emitidos por operaciones no reales**. Por ende, al calzar en cualquiera de los literales —a) o b)— de dicho artículo, se trata siempre de una operación no real.

ARTÍCULO 44º.- COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR OPERACIONES NO REALES

*El comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en éstos, por el responsable de su emisión. **El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto General a las Ventas** originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o contratos de construcción. Para estos efectos **se considera como operación no real las siguientes situaciones:***

a) Aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito, la operación gravada que consta en éste es inexistente o simulada, permitiendo determinar

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de construcción.

*b) Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación. **En caso que el adquirente cancele la operación a través de los medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el derecho al crédito fiscal.** Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento.*

La operación no real no podrá ser acreditada mediante:

- 1. La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o prestados por el emisor del documento; o,*
- 2. La retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso.*

[Énfasis nuestro]

6.3. Estando a que dicha situación se encuentra en una sentencia firme, con calidad de cosa juzgada, se refuerza lo argumentado en este caso en concreto, debido a que también se analizaron dichos documentos para verificar si la operación era fehaciente y así determinar si correspondía el reparo por deducción del impuesto a la renta del ejercicio dos mil seis, sin lograr demostrar el contribuyente que dicha operación es fehaciente.

6.4. En consecuencia, se establece que la decisión de la Sala Superior es errónea, ya que considera aplicar solo el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta para determinar la renta bruta; sin embargo, se debe tener en cuenta necesariamente el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que dispone que se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley; y al no haberse demostrado que las operaciones efectuadas por la empresa son fehacientes, como se explicó anteriormente, no son pasibles de deducción. Por ende, corresponde declarar **fundado** en este extremo el recurso de casación presentado por el Tribunal Fiscal.

DECISIÓN

Por estas consideraciones, **DECLARARON INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Administración de

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 24259-2019
LIMA

Aduanas y de Administración Tributaria y **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del demandado Tribunal Fiscal, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas seiscientos veinticuatro a seiscientos treinta y cinco). En consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista del quince de julio de dos mil diecinueve (fojas quinientos noventa y nueve a seiscientos dieciocho), emitida por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros; y actuando en sede de instancia, **REVOCARON** la sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete que declaro fundada en parte la demanda y, **REFORMANDOLA** declararon **INFUNDADA** la demanda, en este extremo. y **ORDENARON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial *El Peruano* conforme a ley, en los seguidos por la empresa Aleaciones a base de Cobre S.A.C. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre impugnación de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.

Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Dávila Broncano..

SS. SS.

GONZÁLEZ AGUILAR
RUEDA FERNÁNDEZ
BUSTAMANTE DEL CASTILLO
BARRA PINEDA
DÁVILA BRONCANO